

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SALA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Ana Margoth Chamorro Benavides

SENTENCIA N° 31.

Santiago de Cali, diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020).

Proceso No : 76-001-33-33-020-2020-00008-01
Acción : TUTELA
Accionante : Wilmar Arias Gómez – Agente oficioso de Sahara Arias
Accionado : Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
Instancia : Segunda
Tema : Procedencia de la Tutela para proteger el derecho Fundamental a la Salud.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se decide mediante la presente providencia la impugnación formulada por la entidad accionada contra la sentencia de tutela del 4 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Cali mediante la cual tuteló los derechos fundamentales a la salud e integridad personal de Sahara Arias Herrera.

I. ANTECEDENTES.

1. Hechos relevantes descritos por la accionante.

El accionante describe que:

- 1) El 8 de septiembre de 2019 nacieron de manera prematura sus hijas Valeria Arias Herrera y Sahara Arias Herrera; la primera de ellas falleció, mientras que la segunda estuvo tres meses en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Valle del Lili, en la cual se recomendó continuar con el programa contacto canguro fase uno y dos.
- 2) El médico tratante de su hija Sahara Arias Herrera le prescribió el medicamento denominado Palivizumab cada 30 días, sin embargo, solo le fue suministrada la primera dosis.
- 3) Manifestó que la Clínica Valle del Lili no cubre la segunda fase del programa contacto canguro, sino la Clínica Regional de Occidente.
- 4) Empero, la Clínica Regional de Occidente no cuenta con un programa canguro.

2. Pretensiones y derechos fundamentales vulnerados.

El tutelante invoca los derechos fundamentales a la vida digna, la salud e integridad física, y solicita que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional seccional Valle

del Cauca cubra la segunda fase del programa contacto canguro de su hija, Sahara Arias Herrera, y las vacunas de 100 MG de Palivizumab.

3. Informe de Tutela.

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional mediante escrito del 27 de enero de 2020¹ indicó lo siguiente:

- Los medicamentos ordenados se encontraban programados para su entrega.
- Se estaban tomando las medidas administrativas correspondientes para poder garantizar el tratamiento médico recomendado, y se encontraban a la espera de una cotización por parte de la Clínica Valle del Lili, para autorizarla mediante resolución.

4. Sentencia de tutela de primera instancia.

El Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Cali mediante sentencia del 4 de febrero de 2020 tuteló los derechos fundamentales a la salud e integridad física de la niña **Sahara Arias Herrera**, conforme a los siguientes argumentos:

“Si bien, la accionada manifestó, en su contestación, que solicitó cotización a la Fundación Valle del Lili para que esta entidad por medio de Resolución brinde el programa contacto canguro etapa II que requiere la menor, esto no constituye la efectiva prestación de los servicios de salud por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, pues lo que en realidad se busca con la solicitud de amparo y lo que garantiza el derecho a la salud de la menor de la accionante, es la prestación efectiva del mismo.

Adicionalmente, no es de recibo que la entidad accionada solicite al Despacho un tiempo prudencial para realizar las gestiones necesarias con el objeto de brindar el servicio requerido por la menor accionante, dado que el médico tratante que lo prescribe señala que es de carácter PRIORITARIO (fl.25), además, se observa que ha transcurrido más de un mes desde la fecha de prescripción del programa contacto canguro etapa 2 (fl.25), sin que se haya dado cumplimiento al mismo, tiempo suficiente para gestionar la prestación del servicio...”

Y ordenó:

“1. -TUTELAR los derechos fundamentales a la salud e integridad personal de la menor SAHARA ARIAS HERRERA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. - En consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, preste a la menor Sahara Arias Herrera el servicio del programa contacto canguro etapa II; así como también, entregue el medicamento denominado Palivizumab amp x 100 mg en la cantidad señalada y atendiendo a las observaciones realizadas por el médico tratante en la orden médica visible a folios 13 (reverso) del expediente, sin dilaciones ni justificaciones de orden económico o administrativo.”

5. Impugnación

La entidad accionada impugnó el fallo alegando que mediante Resolución N° 024 del 2 de febrero de 2020 se autorizó la segunda fase del programa contacto canguro, la cual tuvo como fecha de inicio el día 10 de febrero de 2020; además, en

¹ Fls. 60-61

relación a la aplicación del medicamento Palivizumab amp. X 100 mg, refiere que fue aplicado a Sahara Arias Herrera el día 24 de enero de 2020, y las dosis faltantes se encuentran plenamente programadas de conformidad con las fechas establecidas en la orden médica.

II. CONSIDERACIONES.

1. Problema jurídico.

La Sala determinará si conforme a los hechos probados en el curso del presente trámite constitucional la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y salud de Sahara Arias Herrera. Y si el fallo de primera instancia debe ser confirmado, o si se configuró un hecho superado al haberse iniciado la segunda etapa del programa contacto canguro y haberse brindado los medicamentos solicitados.

2. Tesis de la sala.

La Sala de Decisión considera que se violentó el derecho a la salud de la niña, pero el fallo de primera instancia debe ser adicionado para ordenar un tratamiento integral que garantice los derechos fundamentales a la salud y a la vida de Sahara Arias Herrera. También estima que no existe hecho superado.

Se llega a esta conclusión con base en el siguiente argumento:

3. Acción de tutela – Marco general.

La tutela es una acción constitucional de carácter subsidiaria, residual y autónoma, por medio de la cual es posible ejercer el control judicial de los actos u omisiones de los órganos públicos o de los entes privados que puedan vulnerar derechos fundamentales, a través de un procedimiento preferente y sumario, salvo las excepciones establecidas en la ley para su procedencia.

Ahora bien, los presupuestos para que proceda la acción de tutela son tres:

- 1) Que se esté ante la *vulneración o amenaza de vulneración de un derecho fundamental* por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en este evento en los casos señalados en la Ley.
- 2) Que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial y,
- 3) Que en caso que el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, la acción de tutela se interponga como un mecanismo transitorio de protección para evitar un perjuicio irremediable.

4. Procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y a la dignidad humana.

La Constitución Política en sus artículos 48 y 49 consagra el derecho a la seguridad social y a la salud, determinando que la salud es un servicio público esencial a cargo del Estado, que debe ser prestado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

La Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a la salud posee una doble connotación: (i) como **un derecho fundamental** y (ii) como **un servicio público**².

² Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2007

Además, la vulneración del derecho fundamental a la salud conculca el derecho a la dignidad humana, debido a que son bienes jurídicos estrechamente ligados. El derecho a la seguridad social así como el derecho a la dignidad son fundamentales, lo que permite su protección por vía de tutela.

Así mismo, se resalta que la materialización del derecho fundamental a la salud exige que todas las entidades que prestan dicho servicio se obliguen a la óptima prestación del mismo, en la búsqueda del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, como quiera que la salud compromete el ejercicio de distintas garantías, como es el caso del derecho a la vida y a la dignidad humana³.

Este criterio ha sido reiterado en numerosa jurisprudencia, así esta Corporación en sentencia T-131 de 27 de marzo de 2015⁴.

5. El deber de prestar el servicio de salud de forma integral y oportuna.

De acuerdo con los artículos 48 y 49 la Constitución Política y los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, el servicio a la salud debe ser prestado conforme con los principios de eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad e integralidad, lo que implica que tanto el Estado como las entidades prestadoras del servicio de salud tienen la obligación de garantizarlo y materializarlo sin que existan barreras injustificadas.

En sentencia T-576 de 2008 la Corte Constitucional precisó las facetas del principio de atención integral en materia de salud, como se expone enseguida:

*“...A propósito de lo expresado, se distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de **integridad de la garantía del derecho a la salud**. Una, relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que llama la atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las personas en materia de salud (...)”⁵ La otra perspectiva, se encamina a destacar la necesidad de proteger el derecho constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas de modo efectivo. Esto es, el compendio de prestaciones orientadas a asegurar que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) paciente...”⁶(Negrillas y subrayado fuera del texto original).*

6. Los trámites administrativos no pueden impedir el acceso a los servicios de salud.

La seguridad social de conformidad con el artículo 48 constitucional, es un servicio público de carácter obligatorio, que abarca el Sistema de Seguridad Social en Salud, que como ya se dijo, debe ser garantizado por el Estado bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Como servicio público, el artículo 365 superior reitera que el Estado debe “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” y que podrá ser prestado por el mismo “directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

3 Ver sentencia T-790 de 2012

4 Magistrado Ponente: MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ.

5 Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-307 de 2007 y T-016 de 2007, entre muchas otras.

6 Ver Sentencia T- 576 DE 2008

Bajo estos preceptos, la Corte Constitucional en la sentencia T-230 de 2009, señaló que *“los conflictos contractuales o administrativos que puedan presentarse entre las distintas entidades o al interior de la propia empresa de salud, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad, permanencia y finalización óptima de los servicios y procedimientos médicos prescritos”*.

A su vez, en la sentencia T-846 de 2011, precisó que no se puede impedir el acceso a los servicios de salud alegando razones económicas, administrativas, funcionales o contractuales, y que el juez de tutela debe impedir que los obligados en su prestación recurran a estos argumentos. De la providencia se transcribe:

“Una de las características propias de la garantía del Estado frente a la prestación de los servicios públicos, es la consistente en garantizar que éstos sean prestados de manera continua y permanente a sus usuarios. Entonces, el derecho a acceder a los servicios públicos debe garantizar la continuación en la prestación de los mismos, especialmente cuando en un caso concreto están comprometidos derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la integridad. En tales casos, le corresponde al juez constitucional impedir que los obligados en la prestación de éstos, aludiendo a aspectos económicos, administrativos, funcionales, y/o contractuales, omitan sus deberes.”

Finalmente, la Alta Corporación ha concluido que *“los trámites administrativos no pueden retrasar o impedir el acceso de las personas a los servicios de salud, ya que esto constituye una violación a los derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y la integridad”*⁷.

7. Sistema de Salud de la Policía Nacional

Mediante la Ley 100 de 1993, el legislador reguló el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y dispuso que a través de ella se determinara el funcionamiento, la orientación, y fundamentos del sistema de seguridad social.⁸ Así mismo, estableció que existen ciertos regímenes exceptuados, entre los que se encuentran los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.⁹

De tal forma, el régimen de salud de la Fuerza Pública, fue regulado por la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000, buscando que su adecuación fuera coherente con la organización y misión institucional, y dividiéndolo en dos subsistemas, a saber: El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y el Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

El Decreto 1795 de 2000, en virtud del cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el artículo 5º, señala que su objeto consiste en

“prestar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su logística Militar y además brindar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios”.

⁷ Sentencia T-499 de 2014, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos

⁸ Ley 100 de 1993, Art. 152 *“los fundamentos que lo rigen, [se] determina su dirección, organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se derivan de su aplicación”*.

⁹ Ley 100 de 1993, Art. 279 *“El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas”*

Por su parte, el artículo 6° del citado señala como principios y características del régimen de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los siguientes:

"ARTICULO 6o. PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS. <Decreto subrogado por la Ley 352 de 1997> Serán principios orientadores para la prestación del servicio de salud del SSMP los siguientes:

*a) CALIDAD. Los servicios que presta el Sistema se fundamentan en valores orientados a satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los usuarios de tal forma que **los servicios se presten de manera integral.***

b) ETICA. Es el conjunto de reglas encaminadas a brindar servicios de salud integrales en un marco de respeto por la vida y la dignidad humana sin ningún distingo.

c) EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho el Sistema sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.

d) UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

e) SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre los Establecimientos de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

*f) **PROTECCION INTEGRAL. El SSMP brindará atención en salud integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, información y fomento de la salud, así como en los aspectos de prevención, protección, diagnóstico, recuperación, rehabilitación,** en los términos y condiciones que se establezcan en el plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, y atenderá todas las actividades que en materia de salud operacional requieran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el cumplimiento de su misión. En el SSMP no existirán restricciones a los servicios prestados a los afiliados y beneficiarios por concepto de preexistencias.*

h) EQUIDAD. El SSMP garantizará servicios de salud de igual calidad a todos sus afiliados y beneficiarios, independientemente de su ubicación geográfica, grado o condición de uniformado o no uniformado, activo, retirado o pensionado."

Frente a la cobertura del servicio del sistema de salud de la Policía Nacional es preciso recurrir a la determinación de su objeto, el cual se encuentra previsto en el artículo 2° de la Ley 352 de 1997, en los siguientes términos:

"El objeto del SSMP es prestar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio de sanidad inherentes a las operaciones militares y policiales." (Subrayas no original).

De manera que se entiende que la cobertura del sistema de salud de la Policía Nacional responde a la necesidad de brindar una atención integral en salud a sus usuarios, cumpliendo así con el mandato constitucional que indica que este servicio debe ser universal y progresivo.

8. Hecho superado por carencia actual del objeto.

La Corte Constitucional en sentencia T 085 de 2018 se pronunció frente al hecho superado por carencia actual del objeto, así:

"La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o "caería en el vacío"¹⁰. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

¹⁰ Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional¹¹. En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo "si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. **De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado**"¹².

Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008¹³, se establecieron los siguientes criterios para determinar si, en un caso concreto, se está o no en presencia de un hecho superado, a saber:

- "1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado."

9. Análisis del caso concreto.

De la documentación aportada al proceso se tiene como hecho probado que el día 8 de septiembre de 2019 nació la niña Sahara Arias Herrera (fl. 7).

1. Con ocasión de su nacimiento prematuro se ordenó seguir el siguiente plan médico:

- Cinco dosis de Palivizumab¹⁴
- Control por el programa *Contacto Canguro fase I y II* en modalidad *home care on*.¹⁵
- Leche materna exclusiva por succión cada 3 horas.¹⁶
- Oxígeno por cánula nasal 0,1 litro
- Bala portátil de oxígeno
- Concentrador de oxígeno bajo flujo
- Visita médica domiciliaria una vez por semana
- Formula PDF 2 V/DÍA¹⁷
- Retamizaje auditivo a los 12 meses.

¹¹ Sentencia T-678 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: "[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

¹² Sentencia T-685 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Subrayado por fuera del texto original.

¹³ M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

¹⁴ Fl. 19 al reverso

¹⁵ Fl. 25

¹⁶ Fl. 21 al reverso

¹⁷ Fl. 23 al reverso

- Control de oftalmología a los 6 meses en su EPS
- Esquema de vacunación: Programar la de los 4 meses de edad – Recomendaciones estrictas de cuidados y señales de alarma
- Padres ya tomaron talleres de RCP para padres y cuidadores, canguro y lactancia materna.
- Cita para valoración de cardiología pediátrica, neumología pediátrica, neurología pediátrica.
- PEDIAVIT 5 gotas al día.
- HERREX 4 gotas al día

2. Sahara Arias Herrera requiere constante vigilancia al haber padecido diferentes patologías que se desprenden de su nacimiento prematuro, tales como¹⁸:

- Episodio de hipertermia.
- Apnea obstructiva con abundante movilización de secreciones blancas.
- Pulsos fuertes y soplo sistólico.
- Tensión arterial elevada
- Taquicardia
- Atelectasia de lóbulo medio
- Anemia
- Diarrea aguda de etiología viral
- Deshidratación

El padre de Sahara Arias Herrera solicitó que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional seccional Valle del Cauca cubra lo que queda del tratamiento de la segunda fase del programa contacto canguro, y las vacunas de 100 MG de Palivizumab. El *a quo* restringió su pronunciamiento a tutelar los derechos de la niña exclusivamente en esas mismas pretensiones.

No obstante, para esta Sala es claro que los tratamientos y cuidados requeridos por un nacimiento prematuro no finalizan con el tratamiento señalado, pues el médico tratante puede disponer otros idóneos y oportunos para aumentar las expectativas de vida.¹⁹

De tal forma que exponer a la niña a trámites administrativos como la autorización de la segunda fase de contacto canguro por medio de resolución implica disminuir su posibilidad de vivir. Pues el recibir los tratamientos y cuidados de forma oportuna aumenta la posibilidad de sobrevivencia en los nacidos prematuramente en un 75%²⁰.

En vista de la naturaleza preventiva de la acción de tutela esta Sala no se limitará a confirmar la orden de entregar los medicamentos ordenados y la autorización del tratamiento "*contacto canguro fase II*", sino que para garantizar una protección de salud integral, y evitar que se repitan prácticas dilatorias por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que puedan llegar a consumarse en un daño

¹⁸ Fls. 21 y 32

¹⁹ En el informe "*Nacidos Demasiado Pronto*", presentado en mayo 2 de 2012 por Acción Global sobre Nacimientos Prematuros de la OMS, Alianza para la Salud de la Madre y el Recién Nacido y el Niño, se indicó que este ha sido un grave problema desatendido, ratificando que "*todos los recién nacidos son vulnerables, pero los bebés prematuros son más aún*" y "*representan casi la mitad de todas las muertes de recién nacidos en el mundo*", siendo "*la segunda causa de muerte en niños menores de 5, después de la neumonía*"; sin embargo, con tratamientos y cuidados especiales podría haber 75% de mayor supervivencia. Sentencia – T-646/2012 <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-646-12.HTM>

²⁰ "*Nacidos Demasiado Pronto*" – Informe de acción global sobre nacimientos prematuros / Organización Mundial de la Salud. Ginebra (2012) Encontrado en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44864/9789241503433_eng.pdf;jsessionid=B40FD2897AF02E3273275AE0C9CE43DE?sequence=1

irreparable para la niña y su familia, adicionara la sentencia para ordenar el tratamiento integral.

Por la misma razón, se colige que en este caso no existe un hecho superado pues las dificultades de salud de la niña requieren de una protección que garantice un tratamiento idóneo y oportuno ante cualquier adversidad medica que pueda presentar con ocasión a su nacimiento prematuro.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia de tutela del 4 de febrero de 2020 proferida por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, preste a Sahara Arias Herrera el servicio del programa contacto canguro etapa II; así como también, entregue el medicamento denominado Palivizumab amp x 100 mg en la cantidad señalada y atendiendo a las observaciones realizadas por el médico tratante en la orden médica visible a folio 13 (reverso) del expediente, sin dilaciones ni justificaciones de orden económico o administrativo. Y garantice el tratamiento integral y oportuno que requiera la niña para el manejo adecuado de las dificultades de salud que pueda presentar con ocasión a su nacimiento prematuro, so pena de incurrir en desacato a orden judicial.

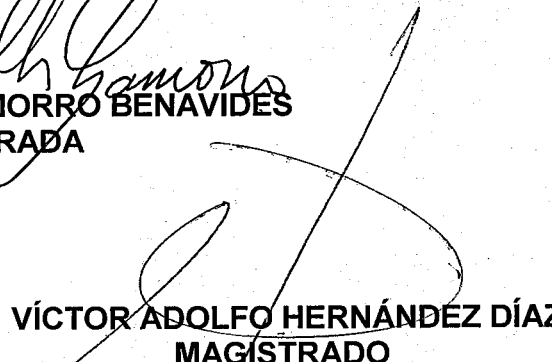
TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 5o del Decreto 306 de 1.992 y envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala, según consta en Acta de la fecha.

Los Magistrados,


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
MAGISTRADA


ZORANNY CASTILLO OTALORA
MAGISTRADA


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
MAGISTRADO

NOTIFICACION POR ESTADO

El auto anterior se notifica en:

Estado No. 056

de 30 JUL 2020

RECIBIDA: _____